



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Junio dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

Radicado: 05360-31-05-002-2017-00015-01
Demandante: FRAY DAGNOBER ARANGO ÁLVAREZ
Demandado: DAVID MAURICIO CADAVID CARTAGENA
Litisconsorte: ALBERTO DARÍO CIFUENTES RESTREPO
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: SANCIÓN DEL ARTÍCULO 99 LEY 50 DE 1990 - SOLIDARIDAD PATRONAL.

La sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.

Decisión que se emite de manera escrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

El apoderado de la parte activa pretende la declaratoria de un contrato de trabajo entre el demandante y el señor David Mauricio Cadavid Cartagena, el cual, se ejecutó entre el 25 de mayo de 2011 y el 24 de noviembre de 2014, fecha ésta en la que terminó la relación de trabajo de manera injusta y unilateral por el estado de salud del señor Fray Dagnober. Como consecuencia de ello, de manera principal solicita que se deje sin efecto el despido ocurrido el 24 de noviembre de 2014; que se ordene al demandado a reintegrar al actor a sus labores que venía desempeñando, con su respectivo salario

insoluto, al igual que todo lo que se deriva del contrato de trabajo, como cesantías, intereses a éstas, primas de servicios y vacaciones por todo el tiempo que ha estado fuera de la empresa, así como también los aportes al sistema general de seguridad social; al pago de la sanción de 180 días del artículo 26 de la ley 361 del año 1997; indexación de las condenas, al pago de costas procesales y condenas ultra y extra petita. De manera subsidiaria, pretende el pago de indemnización por despido injusto; liquidación de las prestaciones sociales definitivas; sanciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990; indemnización de perjuicios por la no dotación de vestido y calzado de labor; auxilio de transporte; incapacidades; gastos médicos; aportes a la seguridad social integral ante COLPENSIONES; indexación de todas y cada una de las condenas; las costas del proceso y lo ultra y extra petita.

En la diligencia llevada a cabo el 15 de marzo de 2018, teniendo en cuenta el testimonio de Alberto Darío Cifuentes Restrepo, la Juez de primera instancia determinó vincular al proceso a este testigo en calidad de litisconsorte necesario por pasiva (fls. 132, 133 y 189).

Posteriormente la juez de primera instancia fijó nuevamente el litigio teniendo en cuenta la comparecencia del litisconsorte por pasiva, de la siguiente manera (fls 192 a 194):

“La controversia jurídica se orienta a determinar si entre las partes desarrolló una relación laboral, estableciéndose con cual de los integrantes de la parte pasiva, y/o si entre estos existe una responsabilidad solidaria, para lo cual deberá verificarse si se dan los elementos de su esencia y en caso de existir, deberá establecerse si su finalización se dio de manera unilateral por parte del empleador, en atención al estado de salud del demandante y sin seguir los procedimientos legales y jurisprudenciales para el efecto, en cuyo caso se verificará la procedencia del reintegro solicitado con el pago de los salarios, prestaciones y pagos a la seguridad social desde la fecha del finiquito del vínculo.

O de manera subsidiaria, deberá determinarse si la terminación del contrato de trabajo se dio sin justa causa y si hay lugar al reconocimiento de la indemnización por despido, las prestaciones sociales causadas durante la relación laboral, las sanciones y demás conceptos laborales reclamados.”

A partir del material probatorio aportado al proceso, la juez de primera instancia declaró que entre el demandante y el señor David Mauricio Cadavid Cartagena existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 31 de mayo de 2011 y el 24 de noviembre de 2014, siendo éste el verdadero empleador, y donde el señor Alberto Darío Cifuentes Restrepo actuó como intermediario sin anunciarse como tal, por lo que declaró la solidaridad entre los mismos; dispuso que el despido del demandante es ineficaz, por lo que ordena al señor David Mauricio Cadavid Cartagena a que reintegre al actor al mismo cargo al que venía desarrollando al momento del despido o a uno igual o superior de acuerdo al estado de salud que padece el demandante; por lo anterior, condenó de manera solidaria a David Mauricio Cadavid Cartagena y a Alberto Darío Cifuentes Restrepo a pagar en favor del demandante el reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el 24 de noviembre de 2014 hasta la fecha del reintegro efectivo, teniendo como base el salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, a realizar en favor del actor la correspondiente afiliación y pago de aportes al fondo de pensiones escogido por éste, previo cálculo o liquidación en los términos de ley, incluyendo los respectivos intereses moratorios desde el 31 de mayo de 2011, teniendo como IBL el salario mínimo mensual vigente para cada anualidad, con la advertencia que se deberán continuar cancelando las cotizaciones a la seguridad social integral mientras dure el vínculo laboral; también les impuso condena al pago de \$3.696.000 debidamente indexados a razón de 180 días de salario como indemnización del artículo 26 de la ley 361 de 1991, al pago de \$2.299.000 por cesantías, \$275.880 por intereses a las cesantías, \$1.149.500 por vacaciones y \$2.299.000 por prima de servicios; finalmente, condenó solidariamente a la parte pasiva al pago de \$1.500.000 como agencias en derecho.

Esta decisión fue objeto de impugnación por los apoderados de cada una de las partes así:

La activa apela la decisión adoptada, solicitando se modifique parcialmente la sentencia, en el sentido de imponer condena a la indexación respecto de los valores sobre los cuales no se ordenó, además de solicitar la imposición de la condena de la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por cuanto si bien esta

pretensión fue elevada de manera subsidiaria, ello no afecta su aplicación por ser una norma de orden público, la cual debe de ser impuesta indistintamente de haber sido solicitada de manera principal o subsidiaria.

Por su parte, el apoderado de David Mauricio Cadavid Cartagena apeló la decisión adoptada solo frente a la solidaridad declarada, pretendiendo con su recurso, sea exonerado su representado de la misma, por cuanto la responsabilidad total de las condenas recae en cabeza de Darío Alberto Cartagena Restrepo, quien, al momento de rendir su testimonio, confesó que era el empleador del demandante.

A su vez, la curadora de Alberto Darío Cifuentes Restrepo presenta recurso de apelación respecto de la solidaridad declarada, por cuanto considera que no existen los requisitos para declararse que su representado fue un simple intermediario en la relación existente entre el demandante y David Mauricio Cadavid Cartagena, además de ello, menciona que si bien Alberto Darío Cifuentes Restrepo en calidad de testigo mencionó que fue el verdadero empleador del demandante, este aspecto no puede considerarse una confesión de parte ya que lo hizo en calidad de testigo y no como demandado.

ALEGATOS

Dentro del término de traslado que establece el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, el apoderado de David Mauricio Cadavid Cartagena solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar exonerarle a su representado de las condenas impuestas, bajo el argumento que nunca tuvo ningún tipo de relación laboral contractual con el señor Fray Dagnober Arango Álvarez.

CONSIDERACIONES

Es importante poner de presente que, a partir de los recursos de alzada formulados y atendiendo al principio de congruencia

le corresponde a esta Corporación determinar: **1)** si existe solidaridad entre los llamados a responder por las condenas de primera instancia, en caso negativo, determinar en cabeza de quién se encuentra el cumplimiento por las mismas, **2)** si es procedente el reconocimiento de la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual fue solicitada como pretensión subsidiaria y **3)** Si hay lugar a indexar las sumas de dinero reconocidas en primera instancia.

SOLIDARIDAD

Como se expuso en los antecedentes, la inconformidad del demandado principal se planteó frente a la solidaridad declarada, pues en su sentir la responsabilidad debía recaer directamente en el vinculado como litisconsorte por pasiva, sin que se hiciera referencia u oposición en el recurso frente a aspectos sustancialmente relevantes que dieron lugar a la declaratoria del vínculo laboral, como una posible ausencia en los elementos esenciales del mismo.

En efecto, no se esgrimió argumento alguno tendiente a desvirtuar la calidad de empleador que halló debidamente acreditada la A Quo y por lo cual el demandado fue declarado responsable de las obligaciones laborales surgidas, por lo que su compromiso deviene directamente de su acción u omisión en la ejecución de la relación de trabajo y no de la figura jurídica de la solidaridad, frente a la cual se duele y finca su inconformidad, sin que le asiste interés para recurrir este punto, en tanto que tal aspecto no le perjudica, como sí ocurre con Alberto Darío Cifuentes vinculado como litisconsorte por pasiva, quien huelga decirlo, a través de su curadora se opuso a la declaratoria de la solidaridad, la cual se pasará a estudiar más adelante.

Es de anotar que, en el término para formular alegaciones, esta parte señaló que no existió vínculo laboral con el accionante por lo que solicitó la exoneración frente a la condena. Nótese que varió la razón de su inconformidad la que ya no se fundó en la solidaridad declarada sino en la ausencia de la relación de trabajo, lo que imposibilita un pronunciamiento al respecto por cuanto en virtud de la consonancia el juez de segundo grado debe ceñirse a lo que expresamente fue materia de inconformidad así expresado en la sustentación del recurso.

Al respecto resulta oportuna la sentencia SL2808-2018:

“Principio de consonancia

Consagrado en el artículo 66A del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, dispone: «la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación».

Lo anterior, implica una restricción o limitación a la competencia funcional del juez de segundo grado, pues le impone el deber de decidir estrictamente dentro del marco fijado en el recurso de apelación interpuesto contra sentencias o autos proferidos por el a quo. Es decir, el Colegiado de instancia no tiene competencia para examinar libremente todos los aspectos de la relación jurídico - laboral sino solo aquellos que sean controvertidos concretamente en el recurso vertical.

Sin lugar a dudas, cuando el legislador limitó la competencia de los jueces de segunda instancia, a la materia objeto del recurso de apelación, lo que pretendió fue focalizar la actividad jurisdiccional, obligando a los recurrentes a concretar con exactitud cuáles son los motivos de disenso contra la decisión del juez de primer grado, lo cual resulta coherente con el objetivo de simplificación de trámite y celeridad pretendido por la Ley 712 de 2001.

Recuérdese que la Corte actualmente adopta una interpretación estricta de dicho principio, en el sentido de que el ad quem está atado a los precisos términos que el recurrente proponga en la apelación, lo cual le impide decidir sobre otros, que sean accesorios a la condena o inherentes a ella, pero que no hayan sido explícitamente reclamados ni sustentados en el recurso, salvo que se trate de derechos laborales mínimos e irrenunciables del trabajador (SL8613-2017 y SL12869-2017).

Lo dicho, en tanto la Corte Constitucional mediante sentencia C-968 de 2003, condicionó la aplicación de la figura de la consonancia en materia laboral, contenida en el artículo 35 de la Ley 712 de 2002, bajo el entendido de que «las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador».

En virtud de lo anterior, se tiene que la Constitución le impone al juez de segundo grado la obligación de pronunciarse sobre las materias relacionadas con los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales, al punto que esos aspectos que de forma implícita se

encuentran cobijados en la impugnación, hacen parte de su competencia funcional, siempre y cuando: (i) hayan sido discutidos en el juicio y (ii) estén debidamente probados.

Por otra parte, es preciso señalar que el referido postulado no tiene aplicación cuando del grado jurisdiccional de consulta se trata, pues como se sabe esta busca la realización de los objetivos superiores, como el orden justo y la prevalencia del derecho sustancial, razón por la que opera por ministerio de la ley y no como consecuencia de la iniciativa de las partes y, en ese sentido, el juez que conoce de la consulta cuenta con amplias facultades para examinar el asunto sin estar sujeto a los límites que impone el recurso de apelación o el principio de la no reformatio in pejus al que se aludirá más adelante.”

Con relación a la exoneración de la solidaridad declarada respecto del litisconsorte necesario por pasiva, sea lo primero en manifestar que la misma tiene su fundamento en el inciso 3 del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, que prevé la solidaridad del intermediario no anunciado, es decir de quien celebra un contrato de trabajo sin informar a los trabajadores dicho carácter.

Sabido es que la declaratoria de simple intermediario, comporta la existencia de dos relaciones que subyacen el contexto de un vínculo laboral. También, que quien obra en tal condición, solo se ocupa de enganchar el personal para que le preste servicios a quien funge como empleador, de suerte que no vincula trabajadores para que presten el servicio para sí, ni les imparte órdenes; el tercero, verdadero “patrono”, sí se favorece de la fuerza de trabajo y ejecuta activamente la subordinación, por manera que es sobre este último, de quien cabe predicar un vínculo laboral, al respecto la sentencia SL1087-2021 señaló:

“Así pues, el Tribunal no cometió el desafuero jurídico enrostrado, pues la condena por salarios y prestaciones sociales causados desde la desvinculación hasta el reintegro ordenado, así como de los aportes en pensiones, no es exclusiva del verdadero empleador, en la medida en que, como lo ha dicho esta Sala, lo que el legislador se propuso fue la protección de los derechos de los trabajadores. En sentencia CSJ SL, 2 ago. 2011, rad. 35988, adoctrino:

A juicio de la Sala la anterior acusación de la censura es equivocada, pues no obstante que la solidaridad que impone el artículo 35 del CST, según su propio tenor literal, surge como respuesta a la omisión del simple intermediario de manifestar al trabajador su condición de

tal y de indicarle el nombre del verdadero empleador, no por ello tal situación se constituye en creadora de nuevos derechos, distintos a los que emanan del contrato de trabajo, pues la solidaridad no es más que una manera de proteger los derechos de los trabajadores, para cuyo efecto se le hacen extensivas, al obligado solidario, las deudas insolutas del empleador, que no son otras que las propias de la relación de trabajo, estén previstas en el propio contrato, en la convención colectiva o en la ley.”.

Así pues, contrario a lo señalado por la A Quo, encuentra la Sala que no hay lugar a concluir que el testimonio del señor Alberto Darío Cifuentes Restrepo (min 42:00 a 1:07:00 min), ha de ser considerado como una confesión para considerarlo intermediario, pues para ese momento su participación al interior del proceso la efectuó en calidad de testigo y no como litisconsorte necesario por pasiva, siendo la confesión, un acto exclusivo de las partes.

Es del caso precisar que el testimonio se diferencia de la declaración de parte en cuanto con ésta se busca la confesión de hechos que favorezcan a la contraparte o perjudiquen al declarante, por lo que debe concluirse que tal medio de prueba debe valorarse como lo que es: un relato sobre las circunstancias atinentes a la situación problemática que se busca resolver con el proceso. En tal sentido, los relatos de los deponentes deben ser analizados, en cuanto a la coherencia, precisión y claridad de lo narrado respecto de los demás elementos de convicción.

En ese orden de ideas se prescindirá del análisis de la versión rendida por quién luego de ser llamado como testigo, se le vinculó como parte con el fin de evitar una flagrante vulneración al derecho de contradicción y de contera al debido proceso.

Ahora, de los demás elementos de prueba allegados al proceso se concluye que habrá de exonerársele al señor Cifuentes Restrepo de la responsabilidad solidaria declarada en primera instancia, por cuanto éste no fue un simple intermediario en la relación laboral existente entre Fray Dagnober y el señor Cadavid Cartagena, sino que era el supervisor del aquí demandante.

Se llega a la anterior conclusión con fundamento en los testimonios de Diana Cifuentes Cárdenas (min 17:57 a 41:53 min), Ana Marcela Arango Álvarez (min 1:07:43 a 1:49:18 min) y Diana Patricia Cárdenas Londoño (min 2:02:42 a 2:15:27 min), quienes coincidieron en señalar que el señor Alberto Darío Cifuentes Restrepo era el supervisor del demandante y no su empleador, siendo el primero quien daba las órdenes en la empresa en la que laboraba el actor, pero en nombre del señor David Mauricio Cadavid Cartagena, quien era el verdadero empleador.

Frente a los dichos de Lina María Ospina Gutiérrez (min 2:15:53 a 2:31:24 min), la Sala considera que no ofrece claridad y precisión frente a lo que se quiere dilucidar en la medida que la deponente afirmó que solo visitaba el lugar de trabajo del actor aproximadamente una vez por semana pues trabajaba en el hueco, sin que ofrezca un relato contundente y coherente de las relaciones entre las partes. Señaló que el señor Darío Alberto se trasladó de la bodega de David Mauricio y se fue con sus máquinas y siguió trabajando en otro lugar con el demandante sin especificar fechas y razones de ese conocimiento.

Por ello, se revocará lo decidido frente a la solidaridad de las condenas en cabeza del señor Cifuentes Restrepo, lo cual incluye las costas del proceso, puesto que no hay elementos que lleven a concluir que éste fungió como un simple intermediario.

Sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 como pretensión subsidiaria.

A fin de resolver el planteamiento que antecede, es permisible destacar lo que prevé el artículo 281 del CGP, el cual señala que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, o en las demás oportunidades que ese código señala, al igual que con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas; no obstante, la doctrina de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, que el juez no está limitado a la literalidad de las reclamaciones o *causa petendi*, sino a la fundamentación y demostración que sobre

estas haga el actor, a quien se le impone el deber de aportar los elementos de juicio que las acrediten y conduzcan a una decisión favorable.

En ese orden, y en armonía a lo considerado por esa Corporación en sentencia CSJ SL 21. May. 2010, rad. 33866, el determinar la falta de congruencia de una providencia, va estrechamente ligada al análisis de parámetros que surgen con ocasión de la confrontación entre la sentencia, las pretensiones, los hechos planteados en el escrito primigenio y las excepciones formuladas por la pasiva.

Ahora bien, como quiera que la parte actora presentó pretensiones principales las cuales fueron acogidas y otras subsidiarias, dentro de la que se cuenta la indemnización por no pago oportuno de las cesantías, cabe recordar que frente a esa situación ha precisado la jurisprudencia del órgano de cierre que, por regla general, las pretensiones subsidiarias solamente pueden ser objeto de estudio cuando las principales no resultan acogidas por el juzgador, por tratarse de pretensiones que se han planteado como excluyentes entre sí (CSJ AL3511-2016, AL5290-2016, AL1216-2018 y AL1746-2020) y que en armonía con lo establecido en la sentencia SL2808-2018, permite concluir que la excepción a dicha regla se encuentra en tratándose “*de derechos laborales mínimos e irrenunciables del trabajador*”, lo cual no sucede en el presente caso, pues la sanción deprecada no es un derecho mínimo e irrenunciable. Por lo anterior, habrá de confirmarse la decisión de primera instancia frente a la no imposición de la pretensión subsidiaria de reconocimiento de la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Indexación de las condenas

En lo que tiene que ver con este aspecto, ha de advertirse que la indexación no aumenta o incrementa las condenas, sino, más bien, garantiza el pago completo e íntegro de la obligación. Sin la indexación, las condenas serían deficitarias y el deudor

recibiría un menor valor del que en realidad se le adeuda, premisa que tiende a agudizarse en tiempos de crisis y congestión judicial.

En efecto, la indexación se erige como una garantía constitucional (artículo 53 de la Constitución Política), que se materializa en el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las prestaciones, en relación con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE. A su vez, el artículo 1626 del Código Civil preceptúa que *“el pago efectivo es la prestación de lo que se debe”*, esto es, que la deuda debe cancelarse de manera total e íntegra a la luz de lo previsto en el artículo 1646 *ibidem*. De ahí que, si un empleador no paga oportunamente una prestación causada en favor del trabajador o extrabajador, tiene la obligación de indexarla como único conducto para cumplir con los mencionados estándares de totalidad e integralidad del pago. Por tal motivo, es incompleto el pago realizado sin el referido ajuste cuando el transcurso del tiempo devaluó el valor de lo debido.

Ahora, la indexación no implica el incremento del valor de los salarios y prestaciones, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como parte de lo debido, puesto que no satisface necesidades sociales del ex trabajador, y menos como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, garantiza que lo adeudado no pierda su valor real.

Desde este punto de vista, cuando el juez del trabajo advierte un menoscabo a los derechos de las partes y, por este motivo, impone el pago de rubros laborales derivadas de una relación laboral, su labor no puede limitarse a la restitución simple y plana de dichos rubros; tiene la obligación de imponer una condena que ponga al perjudicado en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, según lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, según el cual *“dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”*. Y la forma en que

aquello se garantiza, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda.

Por lo anterior, le asiste razón al apoderado de la parte activa en este punto, por lo que se adicionará a la sentencia de primera instancia la indexación de todos los rubros reconocidos en los numerales “CUARTO y SÉPTIMO” de la citada providencia.

Quedan de esta forma resueltos los asuntos objeto de impugnación.

Costas en primera instancia como lo dispuso la a quo solo en cabeza de David Mauricio Cadavid Cartagena, conforme a lo expuesto.

Costas en esta instancia a cargo de David Mauricio Cadavid Cartagena, de las que se tasan como agencias en derecho la suma de 3 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA PARCIALMENTE** la sentencia de primer grado; La **REVOCA** en lo relativo a la solidaridad declarada a cargo del señor Alberto Darío Cifuentes Restrepo al igual que la condena en costas despachada en su contra; y se **ADICIONA** a los numerales **CUARTO** y **SÉPTIMO** de la citada providencia, la indexación de las sumas objeto de condena desde la fecha de su exigibilidad, hasta aquella en la que se produzca el pago efectivo.

Costas en primera instancia como lo dispuso la a quo solo en cabeza de David Mauricio Cadavid Cartagena.

En esta instancia se fijan como agencias en derecho de la alzada en 3 SMLMV a cargo de David Mauricio Cadavid Cartagena.

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

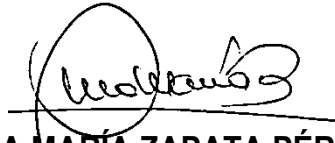
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados N° 104 publicados por medios digitales el 17 de junio de 2021